



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**R.C.35/2019**

En dos de marzo de dos mil veinte, el secretario de acuerdos, da cuenta a la Presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con la promoción registrada con el número 1315 consistente en el proveído de diez de febrero de dos mil veinte dictado por el PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la contradicción de tesis 46/2020. Conste.

Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil veinte.

Agréguese a sus autos el proveído de diez de febrero de dos mil veinte dictado por el PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la contradicción de tesis 46/2020, mediante el cual informa que admitió la denuncia de posible contradicción de tesis 46/2020 de su índice y en virtud de que la resolución emitida en el presente asunto por el Pleno de este Tribunal Colegiado es ahí contendiente solicita se le informe la vigencia del criterio ahí sustentado.

Al respecto informese mediante la versión digitalizada que se realice del presente proveído y la sentencia solicitada, se remitan a la cuenta de correo electrónico institucional que indica para tal fin, que el criterio sustentado en la ejecutoria del presente recurso de revisión R.C. 35/2019 por este Tribunal Colegiado se encuentra vigente, en el entendido de que se resolvió por unanimidad de votos, además se ordena el envío VÍA MINTER del archivo digital que contenga la sentencia dictada en el presente recurso.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Por otra parte, toda vez que el presente asunto se encuentra involucrado en la denuncia de una posible contradicción de tesis y se advierte que se ordenó su archivo como **susceptible de depuración**; sin embargo, en atención a que fue motivo de Denuncia de Contradicción de Tesis; por ello, de conformidad con el **Capítulo Primero, Punto XVII del Acuerdo General Conjunto número 2/2009**, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como lo dispuesto por el **Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la**



JUDICIAL DE LA  
RACIÓN  
NAL COLEGIADO  
RIA CIVIL DEL  
R CIRCUITO  
1 DE MÉXICO



3 25326 420076

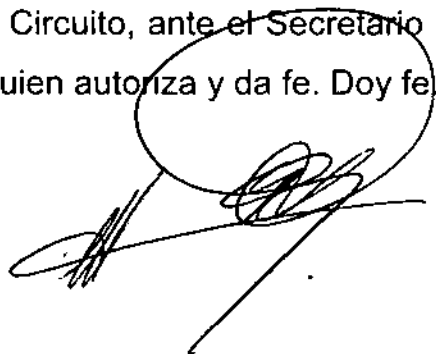
Nación, aprobado el día **diez de diciembre de dos mil doce**, que en su parte considerativa señala: "Los puntos *Vigésimo y Vigésimo Primero* del AGC 2/2009 precisan los supuestos en que procede la destrucción o depuración de los expedientes judiciales, y, en su caso, su conservación por ser de relevancia documental; en virtud de ello deberán **conservarse** aquellos expedientes que no se encuentren considerados en tales supuestos; dentro de éstos se ubican los impedimentos, excusas, recusaciones, conflictos competenciales, incidentes de repetición de acto reclamado, incidentes de inejecución de sentencia, inconformidades, entre otros."; se determina que **ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN** y no se ubica en el supuesto de considerarlo como de relevancia documental en términos del Capítulo Tercero, Punto Noveno, fracción IV, del propio Acuerdo.

Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, téstese el sello de la carátula de este expediente y colóquese el que corresponda.

**CÚMPLASE.**

Así lo acordó y firma la Magistrada Martha Gabriela Sánchez Alonso, Presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos Hilario Salazar Zavaleta quien autoriza y da fe. Doy fe.

HSZ/javm





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

RECURSO DE REVISIÓN: R.C. 35/2019.

QUEJOSA Y RECURRENTE: FERRE  
BARNIEDO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE  
CAPITAL VARIABLE.

MAGISTRADO: VÍCTOR HUGO DÍAZ  
ARELLANO.

SECRETARIA: ESTHER DESSIRE  
RIVERA FLORES.

Vo. Bo.  
ENGROSÓ:  
LIC. ESTHER,  
DESSIRE RIVERA  
FLORES.

Ciudad de México, Acuerdo del Décimo Tribunal  
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,  
correspondiente al día cuatro de abril de dos mil  
diecinueve.

VISTOS para resolver los autos del toca R.C.  
35/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por

[REDACTED]  
por conducto de su apoderado [REDACTED], en  
contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional  
de doce de diciembre de dos mil dieciocho, engrosada el  
treinta y uno del mismo mes y año, por el Juez Cuarto de  
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio  
de amparo indirecto número 1051/2018; y,

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado el veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED], por conducto de su apoderado [REDACTED], solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil, ambos de la Ciudad de México, consistentes en:

“La resolución dictada en el toca 912/2017/03, de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Primera Sala Civil Del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el que resuelve la apelación del incidente de liquidación que en su resolutivo señala:

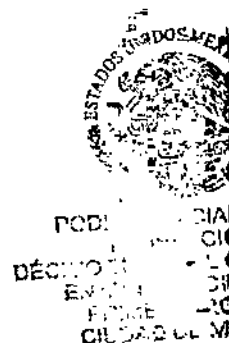
*PRIMERO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, dictada por el JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por [REDACTED] expediente 624/2016.*

*SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas en esta instancia.*

*TERCERO.- Remítase por oficio, copia autorizada de la presente resolución al Juzgado de origen para su conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.*

*CUARTO.- Notifíquese.*

...





**SEGUNDO.** Turnada la demanda tocó su conocimiento al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el Secretario Encargado del Despacho, por auto de dos de octubre de dos mil dieciocho la registró bajo el número 1051/2018 y la tuvo por admitida a trámite.

**TERCERO.** Seguido el juicio por sus trámites legales, el doce de diciembre de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia constitucional, dictándose la resolución respectiva con engrose del día treinta y uno del mismo mes y año, concluyendo con el siguiente punto resolutivo:

"Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a

[REDACTED], contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Cuarto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en esta resolución."

**CUARTO.** Inconforme con lo anterior [REDACTED]

[REDACTED], por conducto de su apoderado [REDACTED], interpuso recurso de revisión y una vez distribuidas entre las partes las copias del escrito de agravios, fue remitido por el Juez de Distrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del

DE LA  
IN  
COLEGIADO  
AL DEL  
JUEZO  
EXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Primer Circuito, turnándose a este cuerpo colegiado; y mediante acuerdo de presidencia de trece de febrero de dos mil diecinueve se admitió a trámite.

En estado de sentencia se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado **VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO** el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve para formular el proyecto de resolución correspondiente.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 37, fracción II, 38, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra la resolución dentro de un juicio de amparo indirecto.

**SEGUNDO.** El recurso de revisión de que se trata fue interpuesto en tiempo, toda vez que la resolución impugnada se notificó a la parte quejosa el siete de enero



de dos mil diecinueve surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, en tanto que el escrito de expresión de agravios fue presentado el veintidós de enero del año en curso, es decir, dentro del término de los diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo.

**TERCERO.** En la resolución recurrida el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México considero lo siguiente:

**"PRIMERO. Competencia.** Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos emitidos por autoridad judicial del orden civil, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este juzgado de control constitucional.

**SEGUNDO. Litis.** Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, como acto reclamado se tendrá:

a) La sentencia de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca 912/2017/03, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la interlocutoria de quince de junio de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente de liquidación de costas, derivado del juicio ordinario mercantil

624/2016, radicado ante el Juzgado Trigésimo Cuarto Civil de esta Ciudad.

**TERCERO.** Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron los actos reclamados.

Lo cual se corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, la cual gozan de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo.

**CUARTO.** Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por las autoridades responsables como sustento de su informe justificado:

1. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario mercantil promovido por [REDACTED], contra [REDACTED], donde se resolvió:

*“PRIMERO.- Ha sido fundada la vía ordinaria mercantil e improcedente la acción principal en el que la parte actora [REDACTED] no probó su acción de pago, y por su parte la demandada [REDACTED] acreditó su EXCEPCIÓN DE PAGO, PLUS PETITIO y su defensa genérica de FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.*

*SEGUNDO.- Se absuelve a la demandada [REDACTED] de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas en el presente juicio.*

*TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos de la demandada [REDACTED] para que los haga valer en la vía y forma que corresponda respecto al saldo que a favor, resultó de su pericial contable rendida en autos por [REDACTED] p [REDACTED] z [REDACTED].*

POR  
DÉCIMO  
EN  
FOLIO  
DE





R.C. 35/2019.

CUARTO.- Se condena a la parte actora [REDACTED] a pagar a la parte demandada [REDACTED] V., las costas procesales causadas en esta instancia."

2. La parte actora interpuso apelación, que conoció y resolvió la Primera Sala Civil de esta Ciudad, quien mediante resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la confirmó y en su resolutivo segundo determinó:

"SEGUNDO.- Se condena a la parte actora al pago de las costas causadas en ambas instancias."

3. En ocurso de catorce de mayo pasado, la demandada promovió incidente de liquidación de costas.

4. Seguido el trámite del incidente, el quince de junio del año en curso, el a quo dictó sentencia interlocutoria en la que lo resolvió de la forma siguiente:

"PRIMERO.- Ha sido procedente la vía incidental en la que parte demandada en el principal, actora incidental [REDACTED] justificó su pretensión incidental y la parte actora en el principal, demandado incidental [REDACTED] no justificó su defensa."

SEGUNDO.- Se aprueba el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS promovido por la parte demandada."

TERCERO.- Se APRUEBA la cantidad de \$2'580,670.63 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de COSTAS GENERADAS EN AMBAS INSTANCIAS.  
(...)"

5. [REDACTED], [REDACTED] d [REDACTED] a [REDACTED] l

[REDACTED], inconforme-interpuso apelación, que conoció y resolvió la Sala responsable, quien mediante resolución de cuatro de septiembre anterior, resolvió:

"PRIMERO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, dictada por el JUEZ

*TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por [REDACTED] contra [REDACTED], expediente 624/2016."*

Esta última actuación constituye el acto reclamado.

**QUINTO.** Estudio de fondo del asunto. La parte quejosa en esencia argumenta que en el acto reclamado se violó lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dejó de analizar la legalidad de la sentencia del juez responsable, en razón de que fue declarada como improcedente su acción en el proceso natural, por lo que debió de regular las costas a las que fue condenada la accionante de amparo, conforme lo establece la jurisprudencia 1a./J. 43/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "*COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)*".<sup>1</sup>.

Se encuentra indebidamente fundado y motivado, puesto que soporta su decisión en un precepto legal equivocado<sup>2</sup>, cuando se debe de tomar como base el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con relación al artículo 1085 del Código de Comercio, pues si bien el juicio tenía una cuantía determinada, también lo es que existe una excepción a la regla

<sup>1</sup> Consultable en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, registro 172232.

<sup>2</sup> 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.



general de la regularización y debieron de cuantificarse las costas como los asuntos de cuantía indeterminada, por declararse la improcedencia de la acción intentada.

Lo anterior es inoperante porque se introducen cuestiones que no fueron materia de la apelación.

En efecto, son inoperantes los conceptos de violación formulados en una demanda de amparo, cuando se hacen valer cuestiones que no se invocaron en los agravios del recurso ordinario ante las autoridades del orden común y, como consecuencia de ello, éstas no tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto, por lo que es indudable que esas cuestiones no pueden atenderse en el juicio de amparo, en tanto que no integraron la litis en dicho recurso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 154, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE LA APELACIÓN.”** Aun cuando el juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se plantea cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo la Suprema Corte, atenta la técnica del juicio de garantías.”<sup>3</sup>

También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, que dice:

<sup>3</sup> Visible en la páginas 126 y 127 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000.

*“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías*



*sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios.”<sup>4</sup>*

En el caso, se advierte que lo que ahora alega la parte quejosa, constituye una cuestión que no fue invocada en la apelación, puesto que en ese recurso, solo se expresaron los agravios siguientes:

- Que el actor incidental no exhibió su cédula profesional, ni la constancia de su registro, tampoco presentó el contrato de prestación de servicios que afirmó tener con la moral demandada.

- No basta que solo se acredite el carácter de licenciado en derecho, sino que también es indispensable que se compruebe la intervención del abogado durante el juicio.

- El artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, describe las actuaciones que deberá de tener el abogado para que se cumpla con el requisito de asesor en todo el juicio, si bien esas actuaciones son establecidas para el cálculo de costas en asuntos de cuantía indeterminada, dichas actuaciones son las mismas para toda clase de procesos, pues debe de existir equidad en ambos.

- No tomó en consideración el escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desahogó la vista con la cuantificación de las costas presentadas por la demandada.

- Tampoco hace mención sobre argumentos vertidos referentes a la falta de acreditación de la erogaciones que

<sup>4</sup> Publicada en la página 39, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época. Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

realizó de forma anticipada la contraria por concepto de gastos causados por el juicio de origen, ni de la falta de personalidad y derecho que tenía la parte demandada en relación a los requisitos establecidos en la ley orgánica citada.

Como se aprecia los argumentos formulados no fueron expuestos ante la Sala responsable, por lo que no integraron la litis de la apelación y, por ende, no pueden analizarse pues implicaría resolver cuestiones que no integraron la litis del recurso.

De ahí lo inoperante de los conceptos de violación.

Por otra parte, aduce que omitió analizar la imputación respecto a la falta de congruencia y exhaustividad del Juzgado de origen, sobre la omisión de pronunciarse respecto a las erogaciones que debió de demostrar el tercero interesado.

Lo anterior es infundado, porque, contrario a lo que indica la accionante de amparo, la autoridad responsable sí se pronunció al respecto, pues indicó que:

- Si bien al momento de la presentación del incidente de liquidación no se exhibió la constancia donde se advirtiera que las cédulas de los licenciados en derecho que autorizó se encontraran registradas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de la consulta realizada por la Sala responsable en su registro electrónico, se advierte que sí lo están.

- Además de que en la celebración de la audiencia de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el licenciado [REDACTED] compareció exhibiendo el original de su cédula profesional.



• Se puede colegir que el promovente del incidente de liquidación de costas es licenciado en derecho con cédula profesional registrada, por lo que no era indispensable la exhibición del original de su cédula profesional, como lo sostiene la inconforme, siendo aplicable la tesis III.2o.C.138 C emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "HONORARIOS DE ABOGADOS. PARA SU PROCEDENCIA EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, ES FACTIBLE ADMINICULAR LA COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL CON OTRAS PRUEBAS QUE DEMUESTREN EL PATROCINIO EN EL JUICIO".

De ahí lo infundado del concepto de violación.

Sin que pase desapercibido para el suscrito, el que la accionante de amparo citara los criterios de rubro:

"SENTENCIAS CIVILES. CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)."5

"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ES NECESARIO QUE SE PRESENTE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN PARA REGULAR SU MÓTO."6

"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL."7

"COSTAS, NATURALEZA DE LAS."8

"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES

5 Ia./J. 34/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, registro 193136.

6 XIX.1o.A.C.47 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito visible en la página 2331 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, registro 169909.

7 De la Tercera Sala, consultable en la página 1053 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXXXVII, Quinta Época, registro 348241.

8 De la Tercera Sala, consultable en la página 2177 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LI, Quinta Época, registro 358068.

*FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.*"<sup>9</sup>

*"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN POR EL TRIBUNAL DE ALZADA ES FUNDAMENTAL COMO PASO PREVIO PARA SU ESTUDIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."*<sup>10</sup>

Puesto que, por lo que hace al primer criterio, no se transgrede su contenido, ya que, con los argumentos expuestos por la accionante de amparo, no se advirtió alguna incongruencia por parte de la autoridad que afectara la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo que ve al resto, al ser tesis aisladas no son obligatorias para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Consecuentemente, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado.

Dicha negativa, se hace extensiva al Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que no se reclaman sus actos por vicios propios, de conformidad con la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:

*"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de*

<sup>9</sup> P. LXXVII/99, emitida por el Pleno, consultable en la página 46 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, registro 192867.

<sup>10</sup> 1a. CCCXXXVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 584 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007671.

PODER  
FE  
DECISIONE  
EN DAT  
PRIM  
CASO/





*garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios.*"<sup>11</sup>"

**CUARTO.** Los agravios formulados por la recurrente son los que obran de la foja cuatro a la diez del cuaderno de revisión, los cuales no se reproducen por ser innecesario.

**QUINTO.** Los motivos de inconformidad vertidos en los agravios hechos valer, se declaran **inoperantes e infundados**, como se verá a continuación.

En principio es importante precisar que debe quedar firme, por falta de impugnación, la calificativa de **infundados** dada a los conceptos de violación esgrimidos por la peticionaria de amparo, por lo cual, la determinación que al respecto se tomó permanece intocada para seguir rigiendo el sentido de la resolución sujeta a revisión en ese aspecto.

Atinente a los agravios en los que aduce que la resolución que recurre transgredió directamente derechos fundamentales pues limitó su derecho a la justicia; se violaron en su perjuicio las garantías y principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y estricto derecho;

<sup>11</sup> Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, octubre de 1994, con el número de tesis II.10. J/12, consultable en la página 41.

aunado a que dice, no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento.

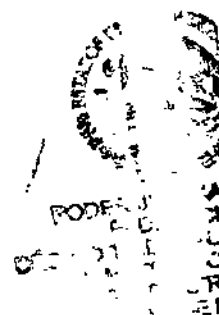
**Resultan inoperantes.**

Los alegatos relativos a que el Juez Federal violó directamente los derechos contenidos en los artículos 16 y 17 Constitucionales. Deben observarse en términos de la fracción I del numeral 1 de la Ley de Amparo que dispone:

“**Artículo 1.** El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

**I.** Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que **violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección** por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;”

De lo que se infiere que si el Juez de Distrito, dada la encomienda que se le otorgó por el texto constitucional al conocer del medio de impugnación extraordinario en la vía indirecta, es decir, de velar por la protección de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para hacer efectiva esa defensa, en cuanto a la violación de sus derechos humanos que aduce; **no le asiste razón** al estimar que hubo tal violación, porque técnica ni jurídicamente es posible que las autoridades encargadas



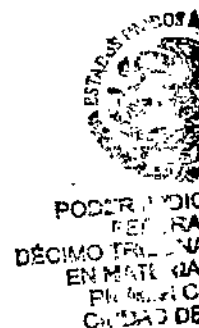


de guardar por el respeto a tales prerrogativas transgredan dichas garantías pues, de estimarse lo contrario, éstas adquirirían el carácter de una autoridad responsable más, cuyos actos tendrían que someterse a la revisión de otro tribunal constitucional, de manera que no es posible afirmar la transgresión de algún derecho o garantía para su protección constitucional por parte del Juzgador y, en todo caso, lo que debe invocarse es la falta de observancia de las disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual las autoridades conocedoras del juicio de garantías deben ceñir su actuación, cuestión que este Órgano de Control Constitucional no estima se haya actualizado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:

**"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.** Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen

en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional





que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.”.

Luego, los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, establecen:

“Artículo 14.

(...)

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(...)

Artículo 17.

(...)

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su

**servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...).”.**

El derecho fundamental de audiencia previsto en el segundo párrafo del numeral 14 Constitucional, consiste en otorgar a los gobernados la oportunidad de defensa previamente al acto de privación, cuyo respeto impone a las autoridades la ineludible obligación de cumplir una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados, como son la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de alegar lo que a su interés convenga y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Esto es, que con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través



de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga la oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote esa etapa probatoria, se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas, que esa decisión pueda ser recurrida a través de los medios ordinarios de defensa que para tal efecto establezca la ley del acto.

Dichas formalidades y su observancia constituyen elementos fundamentales útiles para demostrar, a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico, sino que, por el contrario, ello se hace en estricta observancia del marco jurídico que la rige.

Por lo que hace al derecho fundamental de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 Constitucional, éste consiste en que la ley debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado, para

que, sobre ese aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren que la ley pormenore un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo.

Tal derecho fundamental de seguridad jurídica, tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan.

La garantía judicial contenida en el segundo párrafo del numeral 17 Constitucional, consiste en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y establece que, al ser gratuito, quedan prohibidas las costas judiciales.

Atento a las premisas anotadas, este Tribunal Federal considera que, diverso a lo que precisa la recurrente, no se advierte transgresión a ninguna de las garantías individuales y derechos humanos a que hace referencia, en virtud de que del asunto de donde deriva el







acto reclamado se desprende que el procedimiento se siguió ante los tribunales civiles previamente establecidos, Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en donde se respetaron esas garantías, ya que por lo que hace al incidente de liquidación de costas que nos ocupa, al cumplir dicho incidente con los requisitos de ley, se admitió a trámite, se ordenó dar vista a la hoy inconforme para que manifestara lo que a su derecho correspondiera.

Así, por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la citada revisionista, expuso las consideraciones de hecho y derecho por las que consideró que resultaban improcedentes las pretensiones de su contraparte, se desahogaron los medios de convicción ofrecidos por las partes y, en razón de ello, se procedió a dictar la sentencia definitiva respectiva, la cual fue impugnada por la propia disconforme a través del recurso de apelación que fue resuelto por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, sentencia contra la cual se promovió juicio de amparo indirecto, y respecto de la que el Juez de Garantías emitió resolución en audiencia constitucional de doce de diciembre de dos

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
FEDERACIÓN  
UNIDAD JUDICIAL  
PRIMERA SALA CIVIL  
CIUDAD DE MÉXICO

mil dieciocho engrosada el treinta y uno del mismo mes y año, misma que es la que ahora nos ocupa.

De la reseña anterior, es evidente que no existió violación a las garantías cuestionadas, pues las mismas fueron respetadas durante el procedimiento, ya que las autoridades que antecedieron en el conocimiento de este asunto no se apartaron de los principios fundamentales que norman las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, administración de justicia completa e imparcial, acceso efectivo a la justicia, así como las de igualdad y equidad en el proceso, tampoco se rompió el equilibrio procesal entre las partes, pues no se encontraron impedidas para acreditar sus pretensiones; y de alegar lo que a su derecho correspondía durante el procedimiento. De ahí la calificativa dada a sus argumentos.

En otro contexto, referente a las alegaciones en las que asevera se vulneró su esfera jurídica patrimonial, ya que contrario a lo expresado por el Juez de Distrito, sí fueron materia de apelación las manifestaciones relativas a que el incidente promovido por su contraparte debió estimarse con las regulaciones de un asunto de cuantía





indeterminada.

Que la resolución recurrida, contraviene directamente los artículos 1085 del Código de Comercio y 133 Constitucional; además que se soslayó la jurisprudencia de rubro: **"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."**

Que su colitigante debió presentar la planilla de liquidación tomando como base el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en términos de la tesis de rubro: **"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ES NECESARIO QUE SE PRESENTE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN PARA REGULAR SU MONTO."**

Que la cantidad a la que se le condenó, es superior a la que en su momento pudiera cuantificarse sobre la base de un asunto de cuantía indeterminada.

Son infundadas.

Lo anterior es así, toda vez que no le asiste razón a la impugnante, pues de la lectura efectuada a los conceptos de violación que vertió en el amparo indirecto, es evidente que pretende introducir aspectos novedosos que no hizo valer en el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de quince de junio de dos mil dieciocho.

En efecto, en los agravios que expresó ante la sala civil responsable –y respecto del problema jurídico que aquí subsiste– únicamente sostuvo en esencia lo siguiente:

1. Que el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, describe las actuaciones que deberá tener el abogado para que se cumpla con el requisito de asesorar en todo el juicio, y si bien esas actuaciones son establecidas para el cálculo de costas en asuntos de cuantía indeterminada, dichas actuaciones son las mismas para toda clase de procesos, incluso los regulados por el numeral 129 de la misma legislación, pues debe existir equidad entre ambos.

2. Que se transgredió lo dispuesto en los artículos 1324 y 1327 del Código de Comercio y se omitió lo estipulado en el diverso 1082 del citado código.





3. Citó los criterios de rubros: "COSTAS. REMUNERACIÓN DEL ABOGADO DE LA PARTE VENCEDORA (Aplicación del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal)."; "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE."; "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17. CONSTITUCIONAL."; "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES."; y, "PRUEBAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SE DEBE RECURRIR A LA REGLA DE LOS INCIDENTES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1353 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LIQUIDACIÓN DE INTERESES."

Los anteriores argumentos, son completamente diversos a lo que fueron motivo de inconformidad en el amparo de donde deriva el presente recurso; pues basta una simple lectura a los agravios para advertir que la pretensión inicial de la parte quejosa la hizo derivar del hecho de que el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,

AL TRIBUNAL  
JURISDICCIONAL  
CIVIL DEL  
RECURSO  
MEXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

describe las actuaciones que deberá tener el abogado para que se cumpla con el requisito de asesorar en todo el juicio, y que si bien esas actuaciones son establecidas para el cálculo de costas en asuntos de cuantía indeterminada, dichas actuaciones son las mismas para **toda clase de procesos**, incluso los regulados por el numeral 129 de la misma legislación, pues dijo, debía existir equidad entre ambos.

Esto quiere decir, que en ningún momento sostuvo que el asunto debía resolverse con base en una cuantía indeterminada, sino lo que sostuvo fue que el aludido precepto 129 puede emplearse para toda clase de procesos, aun cuando trate de asuntos de cuantía indeterminada.

Mientras que al momento de presentar el amparo respectivo, su causa de pedir la hizo consistir básicamente en que debe tomarse como base el citado artículo 129, con relación al 1085 del Código de Comercio, pues si bien el juicio tenía una cuantía determinada, también lo es que existe una excepción a la regla general de la regularización y debieron de cuantificarse las costas como los asuntos de



cuantía indeterminada, por declararse la improcedencia de la acción intentada.

Sin que se soslaye el argumento de la disidente en el que aduce que el Juez Federal no tomó en cuenta que la Sala sí se manifestó en torno al tema en cuestión; sin embargo, si la Sala Civil se pronunció respecto a que el asunto se trataba de una cuantía determinada, fue porque desestimó el agravio de la entonces apelante en el que únicamente dijo que debía cuantificarse con base en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, al poderse emplear dicho numeral en toda clase de procesos, más no porque hubiese alegado que el asunto era de cuantía indeterminada.

Incluso, son novedosas todas las tesis y jurisprudencias que ahora pretende sean analizadas, mismas que quedaron reseñadas en párrafos que preceden.

Por tales razones, al intentar introducir planteamientos novedosos que no puso a consideración del Tribunal Responsable, es correcto que el Juez de Garantías declarara inoperantes sus conceptos de violación.

En el entendido de que son inatendibles todos los argumentos en los que contraviene lo resuelto por la juez de origen, habida cuenta que la materia de la presente revisión la constituye la resolución dictada por el Juez de Distrito a la luz de los conceptos de agravio, de manera que no pueden estudiarse las consideraciones emitidas en la diversa sentencia interlocutoria de quince de junio de dos mil dieciocho que dictó la mencionada juez natural.

Finalmente, al haberse pronunciado la determinación de fondo por este Tribunal no es de emitirse mayor pronunciamiento con respecto al escrito presentado por [REDACTED] s [REDACTED], autorizado de la parte recurrente, y al oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que fueron acordados respectivamente el uno y tres abril de dos mil diecinueve; lo anterior, pues este Órgano Colegiado considera que, en el caso, para evitar la dilación en el trámite del recurso de revisión que nos ocupa, en detrimento del artículo 17 Constitucional, debe resolverse solamente en el sentido de que fue presentado. Aunado a que se listó el día veintiocho de marzo del año en curso.







Consecuentemente, ante lo inoperante e infundado de los agravios, lo procedente es **confirmar la sentencia recurrida.**

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 91, 92 y 93 de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

**PRIMERO.** Se confirma la resolución recurrida dictada en audiencia constitucional de doce de diciembre de dos mil dieciocho, engrosada el treinta y uno del mismo mes y año, por el **Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, en el juicio de amparo indirecto número **1051/2018**.

**SEGUNDO.** La Justicia de la Unión no ampara ni protege [REDACTED] re [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] contra los actos y respecto de las autoridades precisadas en el resultando primero y segundo de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito que los

remitió y en su oportunidad archívese el presente expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, **J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI**, **VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO** y **MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO**, siendo Presidente el primero de los nombrados, y ponente el segundo de los mismos; ante el Secretario de Acuerdos licenciado **Hilario Salazar Zavaleta**, que autoriza y da fe.

Doy fe.

  
**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI.**

  
**MAGISTRADO**

**VÍCTOR HUGO DÍAZ  
ARELLANO.**

  
**MAGISTRADA**

**MARTHA GABRIELA  
SÁNCHEZ ALONSO.**

  
**SECRETARIO DE ACUERDOS**

**LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALETA.**



Esta hoja pertenece a la parte final de la resolución dictada en el recurso de revisión civil R.C. 35/2019, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, interpuesto por [REDACTED]

[REDACTED]. En el fallo se resolvió: Confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALA.

El suscrito Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, HACE CONSTAR que con fecha diez de abril de dos mil diecinueve y dentro del término que señala el artículo 184, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se firmó el engrose de la sentencia dictada en el recurso de revisión civil R.C. 35/2019. Doy fe.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALA.



UNIDAD DE LA  
JERARQUÍA  
TRIBUNAL COLEGIADO  
PRIMER CÍRCULO  
DE LA FEDERACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SIN

ESTADOS UNIDOS  
PODER EJ  
FOLIO  
DECIMO TERCERO  
EN MILIT  
PRIMERA  
CICLO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En 11 ABR 2019, se notificó por lista la resolución anterior a las partes, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Doy Fe.

La C. Actur

Lic. María Angélica Maciel Manilla



En 12 ABR 2019, surtieron sus efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, conforme a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe.

La C. Actur

Lic. María Angélica Maciel Manilla

Esta hoja corresponde a las razones de notificación de la resolución de 10 ABR 2019-G, dictada dentro del expediente R.C. 35/2019 interpuesto por [REDACTED]

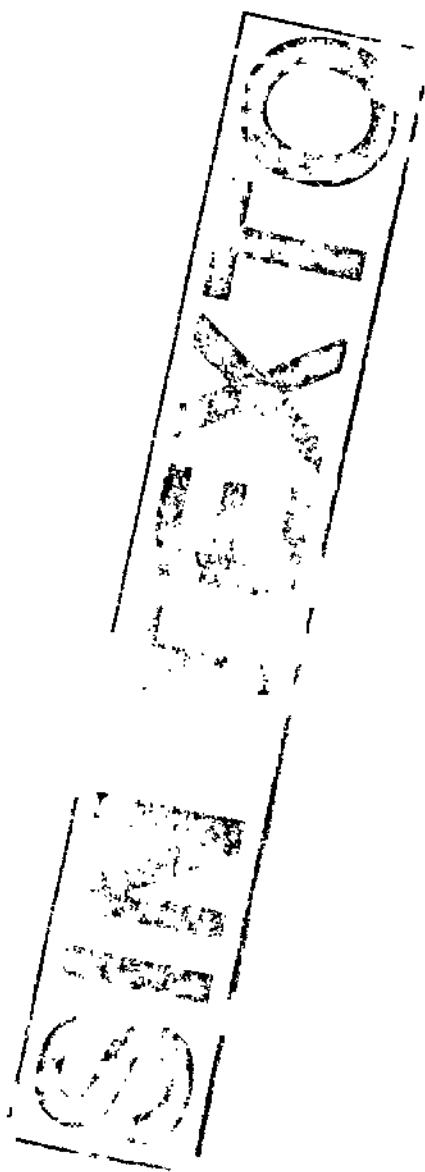
CONSTE.

La C. Actur

Lic. María Angélica Maciel Manilla

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN





ESTADO  
PODER  
F  
DÉCIMO T  
EN M  
PR  
CIU

**Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada**  
**Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf**  
**Secuencia: 3144104**

**Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.**

**Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal**

[illegible]